

Constancia Secretarial

Señor Juez: Le informo que la presente demanda de trámite ejecutivo, nos fue repartida y recibida por este Juzgado por remisión del Juzgado Treinta y Dos Administrativo de Medellín, por considerar que el competente era el Juez Civil Municipal de Medellín. A Despacho.

Medellín, 24 de noviembre de 2022

JULIÁN ANDRÉS RENGIFO CÁRDERNAS
Escribiente



JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD

Medellín, veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Interlocutorio	1844
Proceso	EJECUTIVO
Demandante	LA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
Demandado	MARTHA ELENA AREIZA MÚNERA
Radicado	050014003001 2022 00964 00
Decisión	PROPONE CONFLICTO DE COMPETENCIA, ORDENA REMITIR EXPEDIENTE A LA CORTE CONSTITUCIONAL

ANTECEDENTES

Correspondió por reparto a este Despacho el conocimiento de la presente demanda ejecutiva instaurada por LA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y contra de MARTHA ELENA AREIZA MÚNERA; la cual fue remitida por parte del Juzgado Treinta y Dos Administrativo de Medellín luego de que se radicara un proceso ejecutivo a continuación en el que se solicitaba el pago de las costas de una sentencia emitida por ese juzgado y los intereses de las costas, al considerar que carecía de jurisdicción de conformidad con la postura reciente de la H. Corte Constitucional (Auto nro. 857 del 27 de octubre de 2021).

En dicho auto la H. Corte Constitucional resolvió sobre la competencia entre un Juzgado Administrativo y un Juzgado Civil Municipal ambos de la ciudad de Medellín, e indicó sobre la competencia para conocer asuntos en los que se reclama el pago de condenas impuestas por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa a particulares, que las condenas impuestas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo que no recaigan sobre entidades públicas, escapan al conocimiento de dicha jurisdicción, basando su argumento en el numeral 6 del artículo 104, 297, en concordancia con el artículo 188 del CPACA.

CONSIDERACIONES

El ordenamiento jurídico, mediante los factores de competencia, establece una serie de criterios con los cuales se puede determinar a qué funcionario judicial corresponde el conocimiento de cada asunto en particular.

En materia de competencia, el artículo 17 del Código General del Proceso, que consagra la competencia de los jueces civiles municipales en única instancia, establece que estos conocen, entre otros:

*“1. De los procesos contenciosos de mínima cuantía, incluso los originados en relaciones de naturaleza agraria, **salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa.**”*

También conocerán de los procesos contenciosos de mínima cuantía por responsabilidad médica, de cualquier naturaleza y origen, sin consideración a las partes, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa.”

Revisada la presente demanda, se observa que esta está encaminada al cobro de unas costas procesales que fueron condenadas mediante sentencia judicial emitida dentro de un proceso en la jurisdicción contencioso administrativa, teniendo como título ejecutivo la sentencia del Juzgado Treinta y Dos Administrativo de Medellín

Por su parte, el artículo 305 del código General del Proceso establece la procedencia para la ejecución de las providencias judiciales, indicando:

“podrá exigirse la ejecución de las providencias una vez ejecutoriadas (...)”

Igualmente, el artículo 306 del Código General del Proceso indica frente a la ejecución:

*“Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, **sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada.** Formulada la solicitud el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutive de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior. (...)”*

Por lo anterior, es claro de acuerdo con el Código General del Proceso, que los procesos de ejecución que se instauren con base en las sentencias que condenen al pago de sumas de dinero, se interpondrán ante el juez de conocimiento, es decir, ante el mismo juez que emitió la sentencia objeto de ejecución.

Ahora, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece en el artículo 104 que la Jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los siguientes procesos:

“La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.

Igualmente conocerá de los siguientes procesos:

(...)

6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad

pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades. (...)”

También indica el artículo 188 del CPACA frente a las condenas en costas que se emitan en la jurisdicción de lo contencioso administrativo lo siguiente:

“Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.”

Es así que el CPACA remite al Código General del Proceso frente a los procesos ejecutivos que tengan como objeto el cobro de costas procesales condenadas en procesos de la jurisdicción contencioso administrativa y que se regirán por la ley procesal anteriormente mencionada.

CASO CONCRETO

Se tiene que el Juzgado Treinta y Dos Administrativo, mediante auto del 14 de septiembre de 2022 declaró la falta de jurisdicción y remite a este juzgado para que conozca del proceso ejecutivo el cual se basa en la sentencia que condena a costas procesales a la señora MARTHA ELENA AREIZA MÚNERA y en favor de LA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

El juzgado administrativo basa su argumento para declarar la falta de jurisdicción para conocer de la demanda ejecutiva a continuación, en el auto emitido por la H. Corte Constitucional (Auto nro. 857 del 27 de octubre de 2021) en el cual se soluciona un conflicto de competencia entre un juzgado administrativo de Medellín y un juzgado civil municipal de Medellín, señalando que conforme a los artículos 104, 297 y 188 del CPACA en concordancia con el artículo 12 de la Ley 270 de 1996, los procesos ejecutivos que versen sobre condenas que no recaigan sobre entidades públicas, escapan al conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativo y por tal motivo de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 270 de 1996 la jurisdicción ordinaria conoce de todos los asuntos que no estén asignados a otra jurisdicción.

Por tal motivo el Juzgado administrativo al considerar que la condena en costas se emitió contra un particular y no contra una entidad pública, carece de jurisdicción para conocer el proceso ejecutivo.

Sin embargo, es sentir de este Despacho que de acuerdo con el auto emitido por la H. Corte Constitucional no tuvo en cuenta en su integridad el Código General del Proceso y solo basó su decisión en el articulado del CPACA, esto por cuanto si bien indica el artículo 188 del CPACA que *“Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”*, también es claro que la norma no remite estos procesos a la jurisdicción ordinaria civil, es decir, esta norma no le otorga la competencia a los jueces de la jurisdicción ordinaria para el conocimiento de estos procesos que se originan en la jurisdicción contencioso administrativa; **este Juzgado considera que la Corte no tuvo en cuenta en su providencia y decisión lo reglado en el artículo 306 del Código General del Proceso**, el cual indica que los procesos que se inicien frente a la ejecución de una sentencia se interpondrán y **tramitarán ante el mismo juez que emitió la sentencia** objeto de ejecución y dentro del mismo expediente, lo cual da a entender que conforme a la remisión que ordena el artículo 188 del CPACA en concordancia con el artículo 306 del Código General del Proceso, es ante el Juez Administrativo que se debe iniciar el ejecutivo conexo.

Es por esto que el Juzgado considera que, si bien la Corte Constitucional ordena remitirse a Código General del Proceso con base en el artículo 188 del CPACA, también es cierto que la Corte en ese pronunciamiento, no abordó de manera completa el asunto de la competencia, porque faltó analizar el artículo 306 del C. General del Proceso, que de manera automática redirecciona (o si se quiere, y me excusan la expresión, “de rebote” asigna la competencia a la Jurisdicción contencioso administrativa. Tampoco fue analizado por la Corte, el Capítulo II del Título III del Código General del Proceso, para concluir que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo la competente para seguir conociendo de la ejecución de sus providencias, en virtud del principio de *perpetuatio jurisdictionis* conservando el juez natural del asunto. Nada se opone a que sea el Juez contencioso administrativo, el que con base en una sentencia que él mismo emitió ejecute al particular condenado en costas, ya que es él y nada más que él quien conoció desde su génesis proceso en contra

de la administración pública. Si al interior del proceso el demandante fue una persona natural, la competencia no varía o cambia porque éste sea condenado en costas. El conflicto que aquí se propone se hace en forma respetuosa, y sólo con el fin de que la Corte aborde el estudio y análisis del art. 306 del C. General del proceso.

Así las cosas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 306 del Código General del Proceso, considera este Despacho que no está dentro de su jurisdicción conocer del presente asunto y que este corresponde al JUZGADO TREINTA Y DOS ADMINISTRATIVO DE MEDELLÍN, y por consiguiente considera esta agencia judicial, que habrá de declarar su falta de competencia y dar aplicación a lo consagrado en el artículo 139 del Código General del Proceso, que reza:

“ARTÍCULO 139. TRÁMITE. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación”.

Por lo anteriormente expuesto, el Juzgado,

RESUELVE

PRIMERO: Declarar la falta de competencia de este Juzgado para conocer la demanda de tramite ejecutivo instaurada por LA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y contra de MARTHA ELENA AREIZA MÚNERA, remitida por competencia por parte del Juzgado Treinta y Dos Administrativo de Medellín.

SEGUNDO: Proponer el conflicto negativo de competencia de conformidad con el artículo 139 del Código General del Proceso con el JUZGADO TREINTA Y DOS ADMINISTRATIVO DE MEDELLÍN.

TERCERO: Ordenar el envío del expediente a la Corte Constitucional, a fin de que, en su condición de superior jerárquico común, dirima el presente conflicto de

competencia, mismo que se propone en forma respetuosa y para que se aborde normas procesales que podrían variar la posición asumida en el auto nro. 857 del 27 de octubre de 2021 emitida por ellos y aquí referenciada en la parte motiva.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JARC

Firmado Por:
Gustavo Adolfo Ramirez Serna
Juez
Juzgado Municipal
Civil 001 Oral
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fbcb398cc250bb457af7fb1abbec185b675cf54e656466a96bee870e12cc75474**

Documento generado en 24/11/2022 03:53:57 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>